

# Están asesinando un líder social cada semana en el país



Desde el 2016 van más de 160 asesinatos de líderes sociales. Foto del reciente homenaje a las víctimas en Bogotá. FOTO: CARLOS ORTEGA, EL TIEMPO

La sustitución de cultivos, la minería ilegal y los líos de tierras, entre las razones de esta nueva violencia. Especial multimedia.

La violencia contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales sigue creciendo. El Gobierno ha detectado 600 puntos de riesgo, incluidas veredas y corregimientos, y, según la Fiscalía, se ha llegado al nivel de una muerte por semana. Un grupo de periodistas de EL TIEMPO se desplazó hasta los sitios de algunos de estos crímenes para indagar en profundidad por qué los están matando. [Colombia/1.6](#)

## Además

**José Jaír Cortés**, víctima de 'Cachi' y de 'Guacho', por no querer seguir en los cultivos ilícitos en la zona del país donde más abundan: Tumaco. [1.8](#)

**Guillermo Pérez**, líder en el Cesar, lleva más de 20 años conviviendo con las amenazas y ahora padece las de las 'Autodefensas Gaitanistas'. [1.13](#)

CON ESTE CÓDIGO DE EL TIEMPO.COM, ACCEDA A LOS TESTIMONIOS DE LAS VÍCTIMAS DE ESTA OLA DE VIOLENCIA.



# Colombia



Especial

## Líderes: por qué los matan

EL TIEMPO viajó a varias regiones para indagar la difícil realidad que hay detrás del asesinato de defensores de DD. HH. y líderes sociales, un complejo desafío que encara el país.

**U**n equipo de periodistas y fotógrafos de EL TIEMPO se desplazó a varias zonas del país para indagar las causas de los asesinatos de líderes sociales y de las amenazas que reciben quienes aún son voceros de los problemas de sus comunidades.

En este recorrido, los reporteros se encontraron con historias de valentía de cuatro de ellos, los cuales fueron asesinados en casos que aún están en inves-

tigación, y que son apenas una muestra de este fenómeno de violencia que ha cobrado la vida de 164 líderes desde enero de 2016. Con el presente informe, este diario no solo destapa la complejidad de conflictos y actores armados que están detrás de esos crímenes, sino que también rinde un homenaje a todas estas personas que se han convertido en blanco de las bandas criminales, redes de narcotráfico y minería ilegal, disidencias de las Farc y el Eln.

49

50

51

52

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

37

38

41

42

45

46

35

36

39

40

43

44

47

48

51

52



↻  
2016 | 2017

1. Aldemar Enrique Parra García. 2. Angelina Miranda. 3. Aulio Isarama. 4. Bernardo Cuero. 5. Carlos Arturo Paneso. 6. Danna Méndez. 7. Diego Fernando Rodríguez. 8. Donaldo Rodríguez. 9. Edenis Barrera. 10. Édgar Serrano. 11. Édison Marcial Ortiz Bolaños. 12. Eleázar Tequila Bitucay. 13. Elkin Toro. 14. Emilsen Manyoma. 15. Emiro León. 16. Fáiver Cerón. 17. Freddy Chavarro. 18. Gerson Acosta Salazar. 19. Gonzalo Antonio Martínez Guisao. 20. Guillermo Veldaño. 21. Héctor Mina. 22. Idalia Castillo. 23. Iván Martínez. 24. Jesús Orlando Grueso Obregón. 25. Jimmy Medina. 26. Jorge Arbey Chantré. 27. José Hoyos. 28. José Luis López Varela. 29. José Yimer Cartagena. 30. José Olmedo Obando. 31. José Rafael de la Hoz Villa. 32. Karla Báez Torres. 33. Leonidas González. 34. Luis Fernando Gil. 35. Luis Gerardo Ochoa. 36. Luz Ángela Anzola. 37. Luz Herminia Olarte. 38. Luz Jenny Montaña. 39. Vicente Borrego. 40. María Vásquez. 41. Mario Andrés Calle Correa. 42. Mario Jacanamijoy. 43. Mauricio Fernando Vélez López. 44. Miguel Ángel Hoyos. 45. Miguel Eduardo Parra Rondón. 46. Miguel Pérez. 47. Nataly Salas. 48. Olmedo Pifo. 49. Porfirio Jaramillo. 50. Ricardo Gembuel. 51. Rubiela Sánchez Vanegas. 52. Ruth Alicia López Guisao. 53. Samir López. 54. Segundo Víctor Castillo. 55. Yaneth Calvache. 56. Yoryanis Isabel Bernal Varela. 57. Alberto Román Acosta González. 58. Álvaro Arturo Tenorio Cabezas. 59. Temístocles Machado. 60. Víctor Morato. 61. Víctor Vitola. 62. Wilmer Hernández. 63. Edilberto Cantillo Meza. 64. Efrén Santo. 65. Eliver Buitrago. 66. Eugenio Rentería Martínez. 67. Camilo Alberto Pinzón. 68. Carlos Augusto Paneso. 69. César Augusto Parra. 70. Éder Cuetia Conda. 71. Juana Bautista Almazo. 72. Luis Edilson Arango. 73. José Jaír Cortés. 74. William Castillo Chima. 75. Fabián Antonio Rivera. 76. Jáider Jiménez Cardona. 77. Jairo Arturo Chillito Muñoz. 78. Katherine Escalante Castilla. 79. Narda del Carmen Bachilón. 80. Nelson Fabra Díaz. 81. Washinatón Cedeño Otero. 82. Wilfredv González. 83. Wílmar Felipe Barona. 84. Gildardo de Jesús Valdés.

## Colombia

# Desde 2016 han asesinado a 164 defensores

Los líos de tierras, la sustitución de cultivos ilícitos y la minería ilegal son los principales detonantes de los asesinatos, y entre los responsables están las 'bacrim', las redes de narcotráfico, las disidencias de las Farc y el Eln.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ Y ANGY ALVARADO RODRÍGUEZ - REDACCIÓN EL TIEMPO



**A**l menos un defensor de derechos humanos y líder social y comunitario es asesinado cada semana en Colombia, y lo más preocupante es que esos homicidios no parecen detenerse; por el contrario, crecen mes tras mes.

Desde enero del 2016 al 6 de abril pasado, según los reportes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) y de la Fiscalía General, organismos que confirman en terreno cada caso, se contabilizaban 164 asesinatos. Solo en el primer trimestre de este año van 16 crímenes.

Si bien esos asesinatos no se presentan de forma generalizada en todo el territorio nacional, sí vienen ocurriendo en veredas y corregimientos alejados que enfrentan una serie de situaciones que han terminado agravando los riesgos. El vicepresidente, el general Óscar Naranjo, habla de 600 "puntos rojos con amenaza potencial", y la Fiscalía estima que en algunas de esas zonas hay un aumento de las muertes hasta del 200 por ciento.

En la mayoría de esas regiones estuvieron presentes por décadas las Farc, pero luego del acuerdo de paz de La Habana esos espacios empezaron a ser ocupados por otros grupos ilegales, como Eln -hoy en diálogos con el Gobierno-, Epl, disidencias de las Farc y bandas criminales, como el 'clan del Golfo' y las 'Autodefensas Gaitanistas'.

Esos grupos se disputan el control del territorio y las economías ilegales, como narcotráfico, minería ilegal, microtráfico, extorsión e, incluso, contrabando, y en medio de esa guerra los más vulnerables son las comunidades y sus líderes. En estas zonas se presentan además conflictos por la tierra y por la explotación de

los recursos naturales, y tienen en común una histórica ausencia del Estado y falta de servicios básicos.

Con excepción de Tumaco, Nariño, donde el riesgo para los líderes es casi generalizado, el mayor número de crímenes se ha registrado, principalmente, en Cauca y Antioquia, y luego en Valle y Norte de Santander, y las víctimas han sido líderes comunales, indígenas y campesinos.

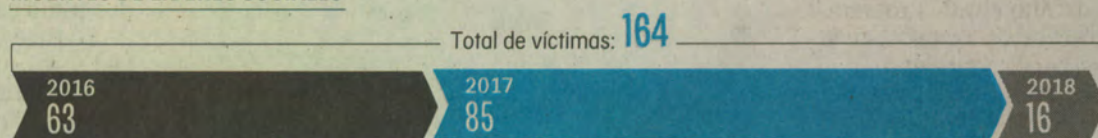
En su último informe, la OACNUDH señala que "algunos asesinatos, especialmente en aquellas antiguas zonas de influencia de las Farc, se podrían haber evitado con una respuesta oportuna y coordinada del Estado a la implementación del acuerdo" y advierte de un incremento de la violencia por la presencia de nuevos actores.

El informe destaca que "varias víctimas fueron asesinadas por apoyar las políticas derivadas del acuerdo (de paz), como la sustitución de cultivos ilícitos y la reforma rural integral", mientras en años anteriores las muertes ocurrían "por oponerse a las políticas del Gobierno; no por apoyarlas".

Esta posición la comparte el defensor del Pueblo, Carlos Negret, quien agrega que la mayoría de las víctimas estaban dedicadas "a la defensa del territorio, al retorno de la población desplazada, a la promoción de los derechos humanos y al activismo por el respeto del agua". La Defensoría reporta 282 casos de líderes asesinados y sentencia: "Esperamos que el Estado actúe de inmediato. Que no muera un solo líder más".

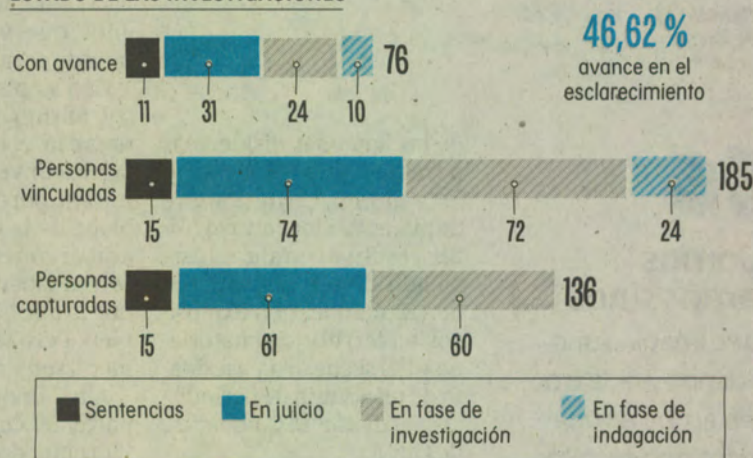
Sin embargo, para el Gobierno Nacional es una prioridad la protección de los líderes. De ahí que la Vicepresidencia asumió el rol de articulador de la presencia institucional. La finalidad es el control territorial

## MUERTES DE LÍDERES SOCIALES



\*Datos según la Fiscalía y Vicepresidencia

## ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES



Fuente: Fiscalía General de la Nación / \*Con corte al 6 de abril de 2018

integral, la protección de las comunidades y el diálogo directo con los líderes sociales para generar una reconstrucción del tejido social y acercar a esas comunidades al Estado.

La estrategia también busca reducir la impunidad en dichos asesinatos. Con ese fin, la Fiscalía formuló nuevos lineamientos para abordar las investigaciones. En ellos se establece como primera hipótesis que el asesinato se dio "por causa de la labor de defensa de los derechos humanos o el liderazgo social", y que será en el desarrollo de la investigación cuando se determine si la víctima era o no un líder.

Esa metodología -que se diseñó con el acompañamiento de la CIDH y ha tenido reconocimiento de la Unión Europea y las ONG Human Rights Watch y Somos Defensores- ha permitido esclarecer el 46,62 por ciento de los casos,

con 11 sentencias, 76 con avances procesales significativos y 136 personas en prisión.

Uno de los casos que son investigados con el nuevo enfoque es el crimen del líder afro Temístocles Machado, asesinado el pasado 27 de enero en Buenaventura, tras el paro cívico en el puerto. En menos de dos meses, la Fiscalía logró determinar que detrás de esta muerte estaría el grupo delictivo 'la Local' y fueron capturadas cuatro personas.

Desde el lado de la protección de los líderes en riesgo, donde la estrategia ha sido la adopción de medidas individuales -la Unidad Nacional de Protección reporta 3.722 líderes amparados-, se está pasando a mecanismos de alerta y prevención colectiva, donde se involucran la Fuerza Pública, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo y las mismas comunidades.

## La extrema violencia contra las líderes

Un hecho que preocupa es que los victimarios de los líderes actúan con mayor sevicia en el caso de las mujeres. Si bien solo cinco de las 16 líderes han perdido la vida de manera atroz en esa oscura guerra, la ONG Somos Defensores llama la atención por la "extrema violencia" con la que se cometen esos crímenes. "Ser mujer y ser líder en Colombia puede resultar en un fin macabro; la extrema violencia con la que se asesina a las líderes es con el fin de que sea un crimen ejemplarizante, que intimida a otras mujeres para asumir liderazgos", asegura Carlos Guevara, coordinador de Somos Defensores.

VEA VIDEOS SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS LÍDERES SOCIALES EN LAS ZONAS MÁS CONFLICTIVAS DEL PAÍS.



## Colombia



Las comunidades y sus representantes en Tumaco están intimidados por los grupos ilegales. FOTO: CARLOS ORTEGA. EL TIEMPO

## La mata de coca silencia a sus enemigos en Tumaco

José Jaír Cortés es el primer líder en ser asesinado por apoyar la sustitución de cultivos ilícitos en la región donde más narcocultivos hay en el mundo.

ALICIA LILIANA MÉNDEZ | @AyitoMendez | justicia@eltiempo.com

“Todo está muy calmado, yo creo que podemos volver con tranquilidad. Al parecer nos levantaron la amenaza, véngase tranquilo al terreno”. Esas fueron las últimas palabras que pronunció -vía telefónica- José Jaír Cortés en diálogo con uno de sus amigos más cercanos que, como él, integraba la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, zona rural de Tumaco, en la costa pacífica nariñense.

Media hora después, sobre las 5 de la tarde, se escucharon varios disparos que de manera inmediata cegaron la vida de Cortés. El cuerpo del hombre de 45 años quedó en la vía que une las veredas Restrepo y Pital sobre el río Mira. Y la fecha, 16 de octubre del año pasado, quedó en la memoria de centenares de campesinos afros que lo admiraban por su trabajo y entrega en bien de la comunidad.

Esa tarde noche que mataron a José Jaír, varios vieron quién le disparó. “Fue el ‘Cholo’; se bajó de la moto, le dijo algo que no fue claro y apuntó”, recuerda Raúl, otro representante comunal que, como todos en la región, es muy amable pero prevenido al hablar, y también tiene miedo de que lo maten.

Un mes atrás, los 15 integrantes de la Junta de Gobierno de Alto Mira y Frontera habían sido sentenciados a muerte por ‘Cachi’ (hoy capturado) y ‘Guacho’, los jefes

■ ‘Guacho’, jefe de las disidencias de la columna ‘Daniel Aldana’ de las Farc.  
● ‘David’ lidera las llamadas ‘Guerrillas Unidas del Pacífico’.  
◆ ‘Cardona’, jefe de la llamada ‘Gente del Orden’.



“

**Somos campesinos (...)**

no se imagina uno andando por la trocha o río arriba en una lancha con escoltas armados”.

Integrante del Consejo Comunitario

de las llamadas disidencias o frente ‘Óliver Sinisterra’. Este último, cuyo nombre de pila es Wálter Patricio Arizala, es el narcotraficante señalado de ser responsable de seis ataques con explosivos en territorio ecuatoriano y del secuestro y asesinato de un equipo de periodistas del diario ‘El Comercio’, de Quito.

¿El motivo de la sentencia? La decisión casi unánime de la comunidad, impulsada por sus líderes, de entrar al programa de sustitución de cultivos ilícitos dentro de la implementación de los acuerdos logrados en La Habana.

### Buscan cambio de vida

Los líderes de la Junta de Gobierno, entre ellos cinco mujeres, representan a 42 comunidades o veredas, subdivididas a la vez en cinco zonas para tener un mayor acercamiento con la comunidad. Ellos decidieron dejar los narcocultivos y darle un giro a su vida luego de varios encuentros realizados el año pasado.

“Yo tuve tres hijos; a dos los tengo estudiando en Cali para alejarlos de la violencia, no quiero que los recluten o me los maten. Al tercero, que era el menor, me lo mataron en Tumaco por andar con quien no debía”, relató Laura, una mujer de 49 años que vive de vender hoja de coca.

Con su piel curtida por el sol, afirmó que ella decidió dejar la coca porque José Jaír la convenció. “Él se iba terreno por terreno y nos hablaba de la importancia de acabar con este negocio. Nosotros sabemos en el fondo que lo que hacemos no hace bien. Pero tenemos que comer”, señaló.

Alto Mira y Frontera hace parte del corregimiento de Llorente, donde se encuentra la mayor concentración de cultivos de coca del mundo. Allí hay unas 18.000 hectáreas de las 23.148 que fueron detectadas en Tumaco, según reporte de Naciones Unidas en el 2016.

Tumaco, o la Perla del Pacífico, como se conoce a

### NO QUEDÓ EN LA IMPUNIDAD

José Jaír Cortés, el líder afro de 45 años que fue asesinado por impulsar la sustitución de matas de coca por cacao, plátano y otros cultivos lícitos, en contravía de la realidad de la zona en donde se concentra la mayor producción de cocaína en el país. Su crimen, perpetrado el pasado 16 de octubre, no quedó en la impunidad. El autor intelectual, Jefferson Chávez Toro, alias Cachi, fue capturado en Pereira el pasado 14 de marzo. En enero, en la Provincia de Esmeraldas (Ecuador) fueron capturados Aris Yilbert Caicedo, ‘Chalo’, quien le disparó, y Wilmer Quinónez, ‘Curandero’, su cómplice. Los tres hacen parte de las disidencias de la guerrilla de las Farc.



este municipio, cuenta con una riqueza hídrica que lo convierte en un corredor natural. Lo atraviesan los ríos Mira y Patía, colinda con la costa Pacífica y limita al sur con Ecuador.

Por cerca de 20 años, la guerrilla de las Farc tuvo presencia en la zona, y según las autoridades trajo una semilla más tecnificada de la mata de coca, lo que convirtió esta región en un fortín del narcotráfico. Hoy, por ejemplo, en las profundidades de Llorente se ven representantes de los carteles mexicanos negociando ellos mismos la producción.

A estos se suman las disidencias, conformadas por combatientes de las Farc que no estuvieron de acuerdo con alinearse con la paz y que en Tumaco eran milicianos de la columna móvil ‘Daniel Aldana’ y del frente 29, a su vez divididos en tres grupos dirigidos por ‘Guacho’, ‘David’ y ‘Cardona’.

“No podemos dar a conocer nuestros nombres ni, mucho menos, la cara, aunque todo el mundo nos conoce aquí en la zona. Pero a los violentos no les va a gustar que estemos hablando con la prensa”, le dijo a EL TIEMPO uno de los representantes de Alto Mira y Frontera.

El hombre de 35 años relató que desde que se les advirtió que iban a ser asesinados por apoyar la sustitución de matas de coca, “y por venir de quien viene la amenaza, salimos de inmediato, solos, sin nuestras familias para Tumaco a buscar protección de las autoridades”.

En el puerto les recibieron la denuncia y les dieron prioridad para salvaguardar su integridad y vida. La Unidad Nacional de Protección (UNP) les asignó una ayuda económica con la que arrendaron una casa. Además, en Alto Mira y Frontera se les consolidó un esquema de seguridad, por cada una de las cinco zonas, consistente en una camioneta blindada, un conductor y uno o dos escoltas.

Precisamente, el día que asesinaron a José Jaír, él había viajado al terreno, como le dicen a la finca, para visitar a su esposa, que se encontraba enferma.

“¿Que por qué no llevé protección? Nosotros somos campesinos, acostumbrados a esta región, no se imagina uno andando por la trocha o río arriba en una lancha con escoltas armados”, dijo uno de los líderes refiriéndose al crimen de Cortés, uno de los pocos que no quedó en la impunidad.

En este caso ya fueron capturados tanto los autores materiales como intelectuales (ver nota anexa); sin embargo, los líderes comunitarios del Alto Mira y Frontera no se sienten seguros porque la amenaza sigue latente mientras estén en la región ‘Guacho’ y los narcos mexicanos que están motivando a los campesinos para que mantengan los cultivos ilícitos.

Los representantes de los consejos comunitarios de Tumaco están llamando a un cambio, tanto en la zona urbana como rural: a dejar la violencia y a que los jóvenes se eduquen y busquen nuevas oportunidades.

Esta posición los deja bajo las amenazas e intimidaciones de quienes se nutren del narcotráfico, le dijo a EL TIEMPO el padre Arnulfo Mina Garcés, vicario general de Diócesis de Tumaco.

### ¿Cuál es la situación de los líderes sociales?

En estos días se han calmado las amenazas, pero eso no quiere decir que no haya tensión. Ellos están preocupados porque saben que están en peligro. Toda declaración que hacen o

llamamiento a las comunidades es seguida por los grupos al margen de la ley, y si está en contra de sus intereses, de lo que ellos tratan de instaurar, pues reaccionan.

### ¿A qué situaciones se refiere?

Hoy se está buscando concientizar a los muchachos de la región para que se alejen de los cultivos ilícitos, para que no se dejen reclutar por estos grupos delictivos. Y eso no les gusta a estos grupos, que de inmediato ven como enemigos a quienes van en contravía de sus pretensiones.

### ¿La sustitución de cultivos ilícitos también está generando amenazas?



*El padre Arnulfo Mina, en viaje para reunirse con las comunidades de Palo Alto.*  
FOTO: CARLOS ORTEGA. EL TIEMPO

Claro, son los líderes sociales los que han impulsado la iniciativa. La comunidad quiere alejarse de la coca, que solo ha causado muerte y desolación. Esa decisión no es bien vista por los que manejan el tema.

### ¿Qué se necesita para acabar con los cultivos de coca en Tumaco?

Que el Gobierno aproveche ahora que los consejos están de acuerdo con cambiar esos cultivos. Que no les vayan a fallar con los pagos, con la asistencia técnica, la promoción y comercialización de las cosechas. Que escuchen a las comunidades, porque una realidad se vive en Bogotá y otra aquí, en el terreno, en Tumaco.

## Colombia

## El caso de Gildardo, el único que había sido archivado, se reactivó

El gestor deportivo y miembro de una junta de acción comunal de Anorí murió hace un año. Versiones hablan de problemas personales y autoría del Eln.

ORLANDO RESTREPO ESCOBAR · ENVIADO ESPECIAL EL TIEMPO · ANORÍ · ANTIOQUIA · [orlres@eltiempo.com](mailto:orlres@eltiempo.com)



Zona urbana de Anorí, municipio azotado durante décadas por grupos armados ilegales, que se disputan el control de la minería ilegal y los cultivos ilícitos. FOTOS: GUILLERMO OSSA. EL TIEMPO

El sicario -joven, delgado, vestido con buzo y chaqueta, gafas, poncho y botas- ingresó al establecimiento y casi a quemarropa descargó tres disparos. Dos se incrustaron en la cabeza de Gildardo de Jesús Valdés, que en ese momento, sentado en la barra de la discoteca Apocalypso 2, chateaba en su celular. El tercer proyectil se estrelló contra la pared del baño, a un costado de la barra donde quedó desgonzado el cuerpo ya sin vida del tesorero y líder deportivo de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Concha Abajo de Anorí, municipio del nordeste antioqueño, a cinco horas de Medellín.

Iban a ser las 10 de la noche del 28 de marzo del 2017 y unas horas antes Gildardo había celebrado con su prima Claudia Valdés el triunfo de la Selección Colombia en las eliminatorias al Mundial Rusia 2018, en un partido que le ganó 0-2 de visitante a Ecuador. Durante la transmisión, Gildardo gritó, brincó y manoteó frente al televisor, cerca al que aún reposa -en una mesa de la sala de la casa de Claudia, donde él siempre se alojaba cuando salía de la vereda- un trofeo ganado por uno de los equipos que él ayudó a patrocinar.

El líder comunitario iba a cumplir 37 años. Su pasión era el fútbol, al que le dedicó gran parte de su vida, primero como deportista y luego en la junta de acción comunal organizando torneos y recolectando fondos para comprarles uniformes a niños y jóvenes de la vereda.

Mientras Gildardo crecía, el conflicto azotado se recrudecía: Anorí fue azotado por la guerra por más de tres décadas y por diferentes actores armados ilegales (Farc, Eln, paramilitares, 'bacrim') que se disputaban el control de la minería ilegal y los cultivos ilícitos. Esta población llegó a ocupar el cuarto lugar en Antioquia con más accidentes por minas antipersona. Ahora, con las Farc desarmadas (hay una de las

ese comité. Más que eso, lo lideraba de forma personal, como deportista que siempre fue. Gestionaba recursos, recogía fondos para conseguir los uniformes. En ese sentido era completamente reconocido, no solo en su vereda sino en la zona", dice Rosmary Cortés, directora de Desarrollo Comunitario de Anorí.

#### Investigación embolada

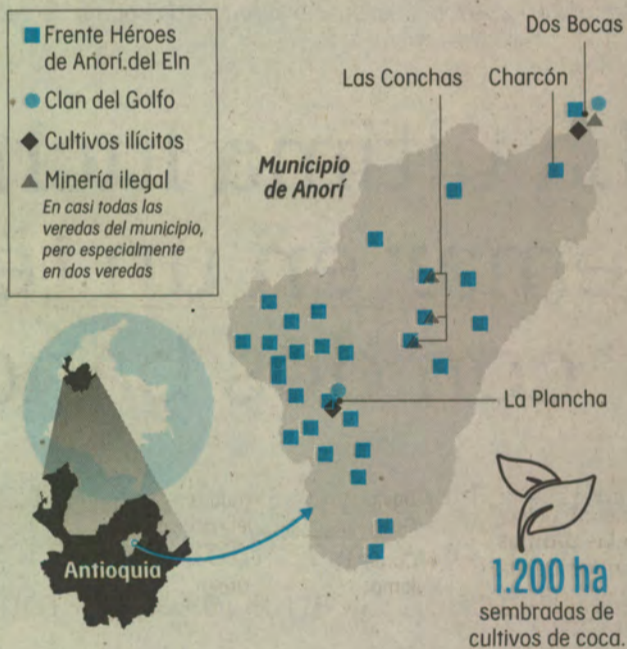
Las causas y autores de su muerte, un año después, no son claros. Esa es, tal vez, una de las razones por las que el caso no avanza. El proceso aparece desde el 25 de noviembre pasado con una anotación de "archivado" en la oficina de la Fiscalía 21 seccional de Anorí. Es el único de los 163 procesos (con 164 muertes) de líderes asesinados que, a menos de un año de ocurrido, fue archivado. Funcionarios judiciales de Anorí le dijeron extraoficialmente a EL TIEMPO que "la investigación se archivó por la imposibilidad de encontrar o establecer el sujeto activo (autor)".

Pero voceros de la Fiscalía en Bogotá confirmaron que aunque la investigación fue archivada en Anorí, ante una alerta del Comité de Seguimiento Permanente para casos de Derechos Humanos de la misma Fiscalía, el proceso fue "desarchivado", se encuentra activo y se le entregó a un fiscal destacado de Medellín, para que lo revise y determine los pasos a seguir.

William Andrés Velásquez, el secretario de Gobierno de Anorí, comenta que así como la investigación por la muerte del líder comunitario no ha dado resultados, una gran mayoría de las que se llevan en este municipio se quedan estancadas, y lo atribuye a la inestabilidad de las autoridades. "No se ha solucionado porque no ha habido una autoridad constante, en menos de un año hemos tenidos cuatro comandantes de Policía, lo mismo de la Sijín", dice. Y agrega: "Aquí tenemos Fiscalía Seccional, Sijín, Poli-

## JUNTO A SU COMUNIDAD

Hasta su muerte, Gildardo de Jesús Valdés trabajó para que niños y jóvenes de su comunidad vieran en el fútbol la alternativa a la guerra. Integró la junta de acción comunal y desde su cargo como tesorero se convirtió en gestor deportivo. Pero, además, se destacó por impulsar otras tareas para ayudar a los habitantes de Concha Abajo, su vereda: si se quemaba un transformador, ahora que ya tienen luz eléctrica, o había algún daño en las instalaciones comunitarias, con los fondos que recolectaba se pagaban los arreglos. El dinero servía también para darle la mano a cualquier persona en caso de una calamidad o una situación difícil.



cía y gran cantidad de representantes del Estado, pero han sido poco operantes (...). Aunque hacen lo que pueden y no les podemos echar la culpa, sobre todo a la Sijín y a la Fiscalía, que tienen los procesos de investigación. Tenemos muy poca policía: 18 para 17.500 habitantes".

#### Las hipótesis

En Anorí nadie sabe que el proceso continúa. Claudia, la única familiar que ha sido llamada a declarar -a pesar de que Gildardo tenía tres hermanos- no sabía que lo habían archivado. "Nunca han dicho nada. La verdad aquí las investigaciones nunca avanzan", afirma, y agrega que cuando fue llamada a declarar por la Sijín -que hizo el levantamiento del cadáver y las primeras investigaciones-, les habló de las hipótesis que todos comentan.

La primera tiene que ver con un joven al que apodaban Serrucho, al parecer miliciano del Eln, que estuvo con Gildardo momentos antes de que le dispararan. El joven se le acercó a Gildardo, que tomaba una cerveza en una taberna cerca del parque, y lo convidó a la discoteca, a la vuelta de la taberna. Allí, según la ver-

del dueño de una retroexcavadora que Gildardo le pidió en arriendo cuando, como la gran mayoría de habitantes en el municipio, sucumbió al embrujo del oro. Anorí, produce -según la Alcaldía- 3,3 toneladas de oro semanales, un 90 por ciento, producto de la minería ilegal. Gildardo trabajaba la retro con unos 10 empleados, en unas tierras que había comprado al lado de la casa donde pasó su niñez. Pero la máquina empezó a vararse y a los gastos en repuestos y gasolina, la comida para los trabajadores y el arriendo de la máquina se sumaron las vacunas del Eln: 8 millones de pesos mensuales.

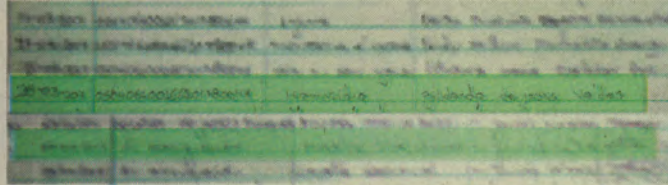
Cuentan que el dueño de la retroexcavadora, al no recibir dinero del arriendo, empezó a presionar a Gildardo para que le devolviera la máquina. "Usted verá si va a venir por ella, yo tampoco se la puedo retener, pero lo que sí le digo es que ahí quedo embalado yo", cuentan familiares que Gildardo le dijo al dueño. A los pocos días, lo mataron. Incluso, un primo del líder asesinado asegura que un paramilitar de la zona le contó a un tío de ellos que lo habían mandando a matar por el problema de la máquina. La re-



zonas veredales transitorias de normalización, con miembros del frente 36), Anorí trata de acomodarse al posconflicto.

Gildardo Valdés era un campesino nato. De niño trabajó la tierra a la par con los adultos. Se levantaba a las 5 a. m. a sembrar yuca, plátano, maíz y frijol, a ordeñar el ganado y, luego, hacia las 9 de la mañana iba a la escuela. Al terminar la primaria se inscribió en el colegio nocturno, en el casco urbano, pero como el trabajo en la finca se puso pesado tras la muerte de su abuelo y no le quedaba tiempo para estudiar, se retiró en sexto.

Después de dos matrimonios y dos hijas empezó a alternar el trabajo en el campo con la organización de torneos de fútbol y la recolección de fondos para implementos deportivos, labor en la que se destacó tanto que durante la elección de la JAC, en el 2016, fue reelegido como tesorero. “Era líder con los semilleros de fútbol. Toda JAC tiene un comité de deportes y Gildardo lideraba



Así aparece registrado el homicidio del líder comunitario en el reporte oficial que hizo la Sijín de la Policía en Anorí.



Gildardo Valdés aparece aquí durante la celebración de uno de los cumpleaños de su primera hija, hace algunos años.

sión de testigos, ‘Serrucho’ recibió una llamada y al colgar le habría dicho a Gildardo: “Me voy, porque esto se va a calentar”. Salió y tomó un mototaxi. Segundos después entró el sicario.

Una de las versiones que circularon tras el crimen, es que el Eln habría ordenado matar al miliciano y el sicario se habría equivocado. Los familiares, entonces, acudieron a esa guerrilla. “Fui al monte -dice uno de ellos que prefiere mantener su identidad en reserva- a hablar con un tal alias Pescao, un comandante, ya muerto. Le dije que queríamos que nos dijeran la verdad y si había sido una equivocación lo aceptábamos. Nos dijo rotundamente que ellos no lo hicieron”.

### El ‘señor de la máquina’

Pocos lo han visto, pero todos saben de él. Su nombre podría ser Albert, vive en Cauca, bajo Cauca antioqueño, según algunas personas, y podría tener las respuestas que necesita la investigación. Albert, si así se llama, es

troexcavadora aún sigue -al sol y al agua- en el mismo sitio.

En el pueblo también circula la versión de las amenazas de un extrabajador de Gildardo, cuyo nombre es Daniel. Cuentan que trabajaba con un motor en la explotación minera y se fracturó dos dedos de una mano. El joven le habría pedido dinero a Gildardo para el tratamiento médico, pero, dicen, se la gastaba en drogas ilícitas. Ante la negativa de Gildardo de volverle a dar dinero, Daniel lo habría buscado y lo habría amenazado: “Esto no se queda así”, le habría dicho.

Y mientras rumores como este corren por las calles de Anorí y las versiones se alimentan con más especulaciones, el proceso, aún estancado, espera la decisión que debe tomar un fiscal de Medellín. “Los miembros del comité consideran que se deben adelantar y agotar otras actuaciones -le dijo a EL TIEMPO un vocero de la Fiscalía-. Tal vez haya otras pruebas que el fiscal no tuvo en cuenta”.

## Colombia



Los restos de Aldemar Parra permanecen en una improvisada bóveda del cementerio de La Loma, corregimiento del municipio de El Paso (Cesar).

## La última lucha de Aldemar en un territorio con dos bandos

El presidente de la Asociación Apícola del Cesar fue uno de los que reclamaron por el reasentamiento de los pueblos afectados por minas de carbón. Sicarios lo asesinaron en enero del 2017.

ANDRÉS ARTUZ FERNÁNDEZ - ENVIADO ESPECIAL DE EL TIEMPO A LA LOMA, CESAR | @Andretuz

### PEDIRÁN CELERIDAD

Gloria Parra había concertado con su familia que dejaría de averiguar sobre la investigación del asesinato de su hermano. Sin embargo, dice que hace poco soñó que William Parra, su padre ya fallecido y quien también fue líder en El Hatillo, le sugería no dejar el crimen en la impunidad. Por eso se dirigirá en próximos días a la Fiscalía 24 de Chiriquaná, Cesar, a pedir celeridad en el proceso. Una fuente oficial que pidió no ser citada dijo a EL TIEMPO que se cuenta con el retrato hablado del presunto autor, pero no hay más información. En la zona se ha alertado sobre la presencia de las 'Autodefensas Gaitanistas' y el 'clan del

Yulieth Parra conducía, como cualquier día, la moto de propiedad de su madre por la trocha de arena rojiza y tiznada de polvillo de carbón que de la vereda El Hatillo conecta con La Loma, corregimiento del municipio de El Paso, en el centro del Cesar. Eran las 3 de la tarde del sábado 7 de enero del 2017, cuando en el trayecto, de unos 10 minutos, se encontró de frente con tres hombres que llevaban cascos en dos motos de alto cilindraje, uno de ellos sujetando un revolver, lo que la llevó a suponer, en medio del susto, que el del arma se disponía a cometer un robo más adelante.

La mujer, robusta y de piel de ébano, prefirió concentrarse en el camino en medio de palos de eucalipto y aumentó la velocidad hasta toparse, a unos cuantos metros, con una multitud de personas que rodeaba, atónita, el cuerpo moribundo de un hombre que acababa de ser baleado. Yulieth se bajó de la moto y corrió a ver de quién se trataba, pues pensó que había ocurrido un accidente entre dos motocicletas, el medio de transporte que pulula en la zona.

Pero el silencio era sepulcral hasta que se percató de que quien estaba tendido en el suelo era Alde-

mar Parra, intentó encontrar respuestas sobre el homicidio de su hermano, el mayor de 8 hijos de Carmen Rosa García Robles, una humilde habitante de esa vereda, y William Parra ya fallecido.

Gloria, o 'Goya' como la conocen en la comunidad, refirió que cuando le dijeron que su hermano estaba muerto tras recibir cuatro disparos, no fue capaz de creerlo. No lo asimilaba, dado que Aldemar nunca reportó amenazas contra su vida, ni siquiera por ser acti-

vo crítico de la afectación que producen desde inicios de la década de los 90 en El Hatillo las multinacionales dedicadas a la explotación de carbón.

En la actualidad, la vereda de casas de bahareque, zinc y palma, con antenas de televisión satelital, está rodeada por las cinco minas que operan la Drummond Ltda., Prodeco y la Sociedad Colombiana Natural Resources (CNR).

El líder social tampoco manifestó que lo hubieran increpado por ser sobrino de Alfonso Martínez, Yolima Parra y Diana Fonseca, líderes comunitarios de la misma vereda que hacen parte de la mesa de concertación en el proceso de reasentamiento de las comunidades de El Hatillo, Plan Bonito y Bquerón, ordenado desde el 2008 por el Estado a dichas compañías. Precisamente, hace dos años, ellos fueron amenazados, a través de panfletos, por las 'Autodefensas Gaitanistas', que, junto con el 'Clan del Golfo', hacen presencia en la zona.

"Él (Aldemar) asistía a todas las reuniones y no le temblaba la voz para decir lo que no le parecía en el proceso de reasentamiento. No hacía parte de la mesa de concerta-



“

Lo único que se ha hecho es

preguntarnos si Aldemar fue amenazado. Nadie vio nada el día que lo asesinaron y el proceso está frenado”.

Gloria Parra García  
HERMANA DEL LÍDER SOCIAL

ción, pero le llamaba lá atención ser presidente de la junta de acción comunal de El Hatillo”, refirió Gloria Parra.

Recordado por la gran mayoría de los 600 habitantes de la vereda por su don de servicio, talento para el fútbol, la alegría que le imprimía a lo que hacía y por el valenato de Los Betos, *La dama del ajedrez*, canción considerada como la oficial de esa población, no ocultaba la felicidad por la llegada de Aldemar Isaac, su tercer hijo, hacía 21 días.

Comenzaba el año nuevo optimista motivado en sacar varios proyectos adelante, sobretodo el de la Asociación Apícola del Cesar (Asograce), que no alcanzaba el primer año de haber sido constituida legalmente y de la cual era su presidente. Dicha asociación fue creada para impulsar la economía de unas 20 familias de El Hatillo, mediante la extracción de miel de colmenas de abejas africanizadas.

Y es que como parte de ese proceso de reasentamiento de los habitantes de la vereda nacieron varios proyectos productivos, como Asograce, que tiene dos años de estar avanzando. Las empresas mineras apoyaron, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), la ejecución de esas iniciativas.

#### Estaba sindicalizado

Todo transcurría normal para Parra García, quien antes de encontrar la muerte, con argollas compradas, esperaba a que Lianis Suárez Madera, su compañera sentimental y madre de sus tres hijos (hoy de 9, 6 y 1 año), se repusiera de la cesárea para contraer nupcias a finales de ese mes de enero. “Me cambió la vida porque él era mi compañía, mi seguridad; era un hombre bueno que no le hizo mal a nadie, seguimos sin respuestas sobre su crimen”, anotó Suárez Madera.

Tanto Lianis Suárez como Gloria Parra coinciden en que son varias las preguntas que se hacen a diario para algún día poder esclarecer el asesinato. El primero de esos interrogantes tiene que ver con que minutos antes de haber sido asesinado Aldemar fue visto en la casa de su madre. Allí, Yulieth, su hermana, le pidió que la llevara a La Loma para una actividad de la iglesia a la que asisten, pero este se negó aduciendo que ya venía de allá y no iba a regresar.

Sigue llamando la atención que pese a haber dicho que no regresaría a La Loma, Aldemar fue interceptado por sus asesinos al final de la vía, antes de ingresar al corregimiento. “El asesinato de mi hermano nadie la vio, por lo que no existen testigos que puedan decir lo que pasó. Lo que sí se han suscitado son comentarios, como que Aldemar tenía una relación con una mujer ajena, lo que sabemos no fue así. También se dice que al momento de haber sido baleado iba en compañía de Jáder Merca-

Gaitanistas' y el 'clan del Golfo'.



tabado en el suelo era Aldemar Parra, su hermano y líder comunitario, asesinado a los 30 años por causas que siguen siendo un misterio. Se arrojó sobre él, intentó levantarlo hasta lograr abrazarlo y, luego, notó que la vida se le había esfumado, al igual que sus asesinos que escaparon, sin dejar rastro, por la trocha que comunica a El Hatillo con los municipios de Becerril y Agustín Codazzi.

“Yulieth fue la primera de la familia en verlo con los disparos, aunque ella creyó que se había accidentado en la moto y que estaba con vida. Fue el pastor Félix Barrios, que estaba entre los curiosos, quien le confirmó que mi hermano ‘Maro’ estaba muerto y que lo habían asesinado. Después, mi hermana cayó en cuenta en que los hombres que había visto eran los asesinos”. Las anteriores fueron declaraciones de Gloria Parra García, quien un año y cuatro meses después de la tragedia que aún



**600 habitantes** afectados por explotación minera. Desde 2008 se realiza el reasentamiento de la población.



Aldemar Parra fue asesinado en la vía que de El Hatillo conduce a La Loma, Cesar. No hubo testigos. FOTOS: CARLOS CAPELLA. EL TIEMPO

do, un amigo que tenía en La Loma y que fue asesinado tres meses después”, insistió Gloria, quien es presidenta de Asograce.

Aldemar Parra fue trabajador de Vale Coal Colombia, multinacional de carbón cuyas concesiones mineras fueron vendidas a la CNR, que hace tres años dejó de extraer el mineral de la mina El Hatillo, por lo que un sinnúmero de empleados, incluido el líder comunitario, quedó cesante.

Sin embargo, Parra García quedó cobijado por el sindicato de la compañía, por lo que no dejaron de reconocerle su salario y las prestaciones como auxiliar de trituradora hasta el momento de su asesinato, aunque no estuviera trabajando. Sus familiares confirmaron que tenía la intención de tomar la liquidación que le ofrecían para comprarse una camioneta que sirviera para fortalecer la operación de Asograce.

# Colombia

## Edilson era una de las pocas voces que surgieron en Puerto Nare tras desarme de 'paras'

El promotor de turismo ambiental fue asesinado en agosto del 2017. Días antes había recibido amenazas y venía siendo extorsionado por desmovilizados.

HEIDI TAMAYO ORTIZ - CORRESPONSAL DE EL TIEMPO | @HeidiTamayo



Uno de los medios de transporte del municipio son las lanchas. Atrás, el río Magdalena. FOTO: GUILLERMO OSSA. ETCE

**D**aniela Gallego Tabares durmió en casa de una amiga y chateó toda la noche con su madre. Lloraba sin saber por qué. Pensaba en su padre, quien no había llegado del trabajo. La última vez que hablaron, a las 4:30 de la tarde del primero de agosto de 2017, él la llamó desde el celular de un amigo porque, según dijo, el suyo estaba dañado. A Daniela le pareció raro que le diera instrucciones de cosas pendientes, como si se estuviera despidiendo. Acordaron que se verían luego. Esa noche, el dueño del celular del que su padre la llamó le dijo que él había salido hacia su casa a las 5:30 p. m.

La madre no aguantó más y salió con su hijo de 12 años a buscarlo, dejando al bebé con una hermana vecina. Eran las 4 de la madrugada del 2 de agosto. Recorrieron la carretera por la que Luis Edilson Arango entraba en su moto todos los días. Vieron la luz del vehículo encendida y pensaron que se había caído. Corrieron hacia él, y el horror los recibió. El hombre yacía en el piso, muy lejos de la motocicleta. Estaba frío y tenso. Al despuntar el alba llegó Daniela. Ya había allí otros familiares. La policía apareció casi a las 7 de la mañana, y el levantamiento del cuerpo se hizo una hora antes del mediodía.

Arango, de 41 años, solo disfrutó siete días la alegría de haberse graduado de bachiller, uno de sus sueños cumplidos. El otro era su deseo de ser abogado. Dejó tres hijos, de 2, 12 y 15 años; una viuda, hermanos y unos padres que perdieron al mayor de los herederos.

do por el conflicto de su natal Argelia (oriente del departamento), se destacó por ser un emprendedor y buscar que el desarrollo llevara bienestar y oportunidades a la comunidad.

Cuando arribó a la región, Luis Edilson empezó a hacer queso, uno de los productos más comunes de la zona. Al tiempo que su negocio crecía, les enseñaba a otras personas la receta para que tuvieran un medio de subsistencia en este municipio silencioso y soleado, de calles planas y bañado por los ríos Nare y Magdalena.

Si bien era reconocido por sus proyectos de emprendimiento, su actividad comercial y por participar en la construcción de una política pública de empleo, en la cual estuvieron la alcaldía, las juntas de acción comunal y otras instituciones, Jüber Martínez, personero local también desplazado del oriente antioqueño, no tenía muy claro que Arango fuera un líder social; solo cuando recibió llamadas de Naciones Unidas y del Ministerio del Interior en busca de respuestas sobre esa muerte.

Su imagen, piensa el personero, resaltaba en Puerto Nare porque allí la participación es poca. Solo hay dos organizaciones de mujeres, una de pescadores y las de padres de familia en los colegios. "No sé si la baja participación se deba a apatía o a la violencia que vivió el municipio por causa de los paramilitares hasta 2005, época en la que el sindicalismo fue muy perseguido", afirma el funcionario.

Sin embargo, su familia asegura que fue un líder que luchaba para su bienestar y el de los

empleo. Luego sacó adelante una empresa de suministros de materiales de construcción y mejoramiento de vías.

Pero su capacidad era limitada para abrir opciones de trabajo. Por eso movilizó a muchas personas para exigir a Ecopetrol, que tiene campos en la zona, contratar mano de obra local. Fueron unos seis paros los que realizaron, según su hermano Wilmar de Jesús. En ese proceso crearon una veeduría ciudadana y lograron que la compañía les abriera sus puertas a trabajadores del municipio.

Con la idea del progreso en mente, Luis Edilson empezó a soñar con el turismo como motor del desarrollo. Decía que el petróleo se acabaría algún día, por lo que era necesario preservar la naturaleza y convertirla en una oportunidad. El sueño se materializó cuando compró un terreno dotado con una cascada y belleza ecológica al otro lado del río Magdalena, a 20 minutos del casco urbano. Él y su familia construyeron tres cabañas, se fueron a vivir al lugar y empezaron a promover la visita de turistas. La idea era generar más empleo con la creación del Parque Ecoturístico La Zoná, el legado que le dejó a su familia.

"Hace más o menos tres años, él decidió entrar a la JAC de Canteras, y una de las cosas que más quería era que abrieran una carretera abandonada que estaba en un terreno de Argos, porque era la forma más fácil de llegar hasta La Zoná, al igual que podía beneficiar a las personas que movilizaban su leche por allí, que iban a la escuela o se dirigían al casco urba-

### ¿DÓNDE ESTÁ EL CASO?

La Unidad para las Víctimas confirmó que en mayo del 2014, Luis Edilson Arango Gallego fue incluido en el registro único de víctimas por desplazamiento. Tras su homicidio, luego de la declaración de los familiares, también fue reconocido como víctima del conflicto. La seccional de la Fiscalía en Puerto Nare le dijo a EL TIEMPO extraoficialmente que el caso fue remitido a la seccional de Puerto Triunfo. Sin embargo, fuentes de la dirección del Magdalena Medio dijeron que el expediente fue enviado a Bogotá. Allí indicaron que no lo han recibido, pero que va en etapa de indagación preliminar.

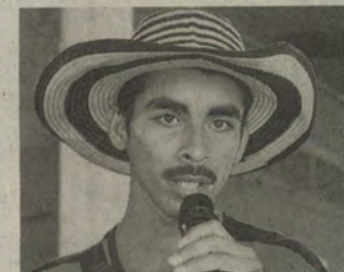


### Cuatro crímenes de líderes esclarecidos



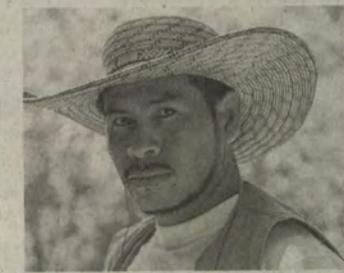
TEMÍSTOCLES MACHADO

El líder social y miembro del Movimiento Paro Cívico de Buenaventura Temístocles Machado Rentería fue asesinado el 27 de enero de este año en el parqueadero Los Nativos de ese municipio. Por su muerte fueron capturados Jorge Luis Jaramillo Valencia, el 'Costeño'; Carlos Daniel Delgado Urrutia, 'Dany'; Edwin Samir Rosero Obregón, 'Samir', y Fabio Segura Garcés, 'Don Big', quienes pertenecerían al grupo delincuencia 'la Local'. El crimen se cometió, dice la Fiscalía, "con ocasión de la defensa de Machado en Isla de Paz y otros barrios".



JOSÉ YILMER CARTAGENA

El 11 de enero de 2017 fue asesinado José Yilmer Cartagena Úsuga. El líder social, de 30 años, se dedicaba a la agricultura y era defensor de derechos humanos en Tierralta, Córdoba, y en el Urabá antioqueño. Cartagena realizaba actividades pedagógicas con los campesinos para explicar los acuerdos de paz con las Farc. La Fiscalía encontró que el crimen fue ejecutado por el 'clan del Golfo' y condenó a 18 años de prisión a Adrián Mango Higueta, líder del grupo ilegal en el municipio de Carepa, como coautor del crimen. Mango no aceptó cargos.



WILLIAM CASTILLO CHIMA

El 7 de marzo de 2016 fue asesinado William Castillo Chima, quien hacía parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (Aheramiguia) en el municipio El Bagre, en el bajo Cauca antioqueño. Por su crimen fue condenado a 17 años y 8 meses de prisión Didier Rosario López, quien según la investigación de la Fiscalía fue el autor material del homicidio. López fue identificado e individualizado plenamente con apoyo de la Unidad Nacional contra el Crimen Organizado.

la empresa la cerró de nuevo.

Pero eso no detuvo a Luis Edilson en su idea de generar un beneficio para todos con el desarrollo de la región. En vista de que Celsia tiene el proyecto de una represa, logró que escucharan su plan de construir un teleférico que pasaría por cuatro municipios a lo largo del río Nare: Puerto Nare, San Luis, San Carlos y Caracolí. Esa era la forma de resarcir el impacto ambiental de la represa, relata Benito Arango, el padre. Sin embargo, ese sueño solo quedó plasmado en una maqueta que Luis Edilson le ayudó a hacer a su hijo para una feria de ciencia en el colegio.

Tras ocho meses de ocurrido, este crimen sigue siendo un misterio para muchos, en un

Este asesinato, uno de los tres registrados el año pasado en Puerto Nare (Magdalena Medio antioqueño), conmocionó a los habitantes. El rumor corrió como el viento en ese tranquilo y pequeño municipio de 16.000 habitantes, donde los niños juegan bajo el sol y las personas conversan en las aceras, mientras que los pescadores pasan reunidos en el muelle, al lado de coloridas lanchas apiladas en la orilla del Magdalena.

Los hermanos se enteraron tres días antes de su muerte de que estaba recibiendo amenazas, pero él las había ocultado. Ocho meses después de su muerte, la familia dice tener indicios de que estaba siendo extorsionado por paramilitares desmovilizados que les querían sacar provecho a sus actividades de emprendimiento.

Todos los conocían como 'Benito', el nombre de su padre, pero pocos sabían que se llamaba Luis Edilson Arango. Desde que llegó allí, en 1998, desplaza-

demás. La quejera no fue la única forma que encontró para dar

no", dice su hija. La vía solo estuvo abierta un año, pues luego

municipio en el que según la Policía no hay presencia de grupos armados ilegales ni de minería ilegal ni cultivos ilícitos. La tasa de homicidios es baja: en el transcurso de este 2018 se ha registrado un caso, confirmó el intendente Camilo Saavedra, subcomandante de la estación de policía de Puerto Nare.

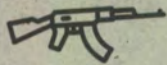
Sin embargo, la violencia sí llegó al hogar de los Arango. Los dictámenes de Medicina Legal indicaron que su asesinato fue a eso de las 8 o 9 p. m. del primero de agosto de 2017, y fuentes de la Fiscalía explican que el caso está en indagación preliminar, pero no lograron confirmarle a EL TIEMPO en cuál seccional se encuentra el expediente.

Por ahora, la familia espera que la justicia pueda determinar quiénes son los responsables de la muerte de una de las pocas personas que alzaron su voz para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Puerto Nare.

Cifra de homicidios  
2017 3  
2018 1

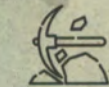


● Brotes de delincuencia común



En el municipio ni en lugares aledaños hay influencia de grupos armados organizados.

Peña Flor  
Zona donde fue asesinado el líder



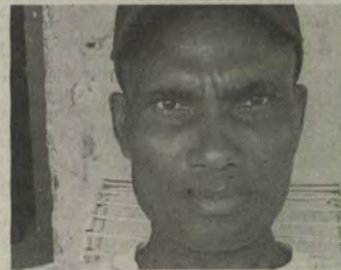
No hay minería ilegal.



Todos los cultivos ilícitos fueron erradicados.

La Sierra

Casco urbano  
Puerto Nare



■ SEGUNDO CASTILLO

El 25 de mayo de 2017 en el barrio Panamá, del municipio de Tumaco (Nariño), fue asesinado con arma de fuego Segundo Víctor Castillo. Castillo lideró el proceso de desmovilización de 127 disidentes de las Farc el 7 de abril del 2017 en el coliseo de Tumaco. La Fiscalía indicó que Albert Caicedo Quintero, 'Albert', fue quien ordenó el asesinato a Cristhian Francisco Caicedo Sánchez, 'Cristian'. Ambos fueron capturados. Entre las pruebas de la Fiscalía hay entrevistas a testigos, declaraciones juradas, fotografías e inspecciones judiciales.

## Colombia



Un grupo de guardias indígenas acompañan al líder Ermes Pete por el cerro donde en octubre le hicieron un atentado. Abajo, la población de Belalcázar. FOTOS: CÉSAR MELGAREJO

## El indígena que se siente prisionero en su tierra

Desde que fue elegido gobernador del resguardo de Belalcázar, en Cauca, Ermes Pete recibe panfletos y llamadas amenazantes. El joven teólogo y estudiante de ciencias religiosas cuenta que tras el atentado que sufrió en octubre no puede salir del territorio.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ - EDITOR DE EL TIEMPO | guirei@eltiempo.com

“Ermes Pete se nos escapó, pero de la siguiente no se salva”. Esta es la amenaza que recibió el líder indígena Ermes Evelio Pete en un panfleto estando aún convaleciente, a la espera de que sanaran las heridas que le dejó un atentado contra su vida.

Era la 1:30 de la madrugada del 13 de octubre del 2017 y el líder nasa se disponía a viajar a Popayán para reclamar el chaleco y el celular que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le ofreció días antes para su seguridad. Este padre de tres niños salió en moto de su casa a encontrarse con los dos guardias que, armados con bastón, lo acompañan desde que empezaron las amenazas.

Y, aunque le dispararon en ocho ocasiones, solo recibió un impacto en el hombro. Se salvó, explica mientras camina por el mismo sitio de atentado, porque su motocicleta se resbaló -bajaba por un cerro- y él rodó hasta un pastizal. En medio de los disparos aparecieron sus dos ángeles de la guarda, y los sicarios lograron ocultarse en la oscura manigua. Tras ese hecho le llevaron hasta el pueblo el chaleco y el celular -que no funciona muy bien en esa zona montañosa-, y la Fiscalía abrió una investigación por lesiones personales.

“Estoy prisionero en mi propia tierra. Ya no puedo salir ni a las veredas, y si lo hago, tengo que alertar a las comunidades”, dice el líder de 35 años de edad, para quien el día comienza después de las siete de la mañana y se acaba a las cinco de la tarde, cuando por seguridad debe guardarse en su casa.

Ermes es líder del resguardo de Belalcázar, uno de los tres que hay en el municipio de Páez, al sur del nevado del Huila, que en los días soleados suele asomarse por encima de las montañas, y que dista unas tres horas por trocha de Río Chiquito, el antiguo enclave de las Farc.

A esta región no se podía ingre-

sinatos de líderes en este 2018, según el exconsejero del Cric José Hildo Pete Vivas.

“Le hemos reclamado al Gobierno porque no hay garantía a la vida. La vida es una sola, no es que uno tenga dos o tres más de repuesto”, dice este comunero que también es víctima de amenazas.

Y es que son tantos los conflictos y actores que hay en Páez que nadie sabe con certeza qué es lo que le genera riesgo a su líder. Por un lado, hay una vieja disputa de tierras que se recrudeció en los últimos dos años. Comuneros reclaman un territorio en donde se encuentran unas minas de sal abandonadas. Por otro lado, los pequeños cultivos de coca persisten, aunque viene ganando espacio el café. En 2016 se estimaban 1.700 hectáreas de cafetales. Además, la región tiene un importante potencial aurífero.

A este panorama se suma el hecho de que ese territorio se convirtió en un corredor de tráfico de cocaína y marihuana desde el norte del Cauca hacia La Plata y Neiva, en el Huila, y Bogotá.

### Desde primaria es líder

Ermes nació en el sector de Belén, en el resguardo de Chinas, y empezó a ir a la escuela a pesar de la oposición de su padre, un nasa que cultivaba café y frijol y tenía algunas vacas. Pero en las aulas pronto empezaron a develarse sus cualidades de líder. En cuarto de primaria fue elegido personero estudiantil y en quinto, gobernador.

Su apoyo siempre ha sido su madre. Ella es quien le inculcó el amor por el estudio y le buscó una beca para que se fuera a Villavicencio a estudiar teología, no obstante que su sueño era ser abogado. Cinco años después, Ermes regresó a Be-

lalcázar y casi de inmediato le ofrecieron un puesto en la oficina de Asuntos Indígenas de la Alcaldía de Páez. Desde allí empezó a trabajar en programas de organización comunitaria y de emprendimiento, una labor que alternó con cursos de sistemas y de caligrafía del nasa yuwe, la lengua de su etnia.

Desde finales del 2015, durante una asamblea del resguardo, lo designaron gobernador, y un año después fue reelegido. “Uno no se hace líder porque quiere, sino porque la comunidad lo delega”, señala Ermes, quien como líder le tocó tomar decisiones que terminaron por “incomodar” a mucha gente, al tiempo que empezó a tener visibilidad en el departamento y a nivel nacional.

Él participó en el 2016 en los encuentros con el Gobierno Nacional por la movilización de La María, en Piendamó, y actualmente es delegado ante la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), que representa a las comunidades y a las víctimas del Cauca en la comisión de la verdad creada para esclarecer los crímenes de las Farc contra indígenas, y es fiscal de la Asociación de Cabildos Nasa Cxhacxha, con 17 organizaciones.

### Los panfletos y llamadas

No llevaba tres meses de su primer periodo como gobernador cuando recibió la primera advertencia. En un panfleto le exigían dejar las acciones de control que venía realizando la guardia. Pero, con el tiempo, esos mensajes se volvieron frecuentes, llegaban cada dos o tres meses, y a medida que salía uno nuevo iba aumentando la amenaza. La mayoría son de las ‘Águilas Negras’.

Pero no solo son las bandas criminales las que pueden estar generando zozobra. Desde octubre del 2016 aparecieron los panfletos y grafitis del Eln y luego, en julio de 2017, los del Epl, y, últimamente,

los del sexto frente de las Farc, que estaría reorganizándose desde Río Chiquito y en marzo pasado ordenó restricciones a la movilidad. Poco antes, la guardia había interceptado un volante en el que, con nombres propios, citaba a varios comerciantes.

“En las condiciones actuales, por la presencia de diferentes actores, Ermes está expuesto a que el riesgo sematerialice”, asegura el personero de Páez, Ovéimar Muñoz, quien se declara preocupado porque el conflicto está escalando. De hecho, a finales de marzo del año pasado, de los volantes se pasó a movimientos de personas extrañas en el entorno donde él se mueve. Era un domingo y el líder había decidido quedarse en casa para ir a la playa del río Páez a jugar fútbol con sus hijos. Por eso no salió con el tradicional capisario de los nasa, sino con la sudadera del resguardo, y pasó -cuenta- muy cerca de los hombres motorizados que lo esperaban, pero no lo reconocieron. Él se enteró de esos seguimientos porque un miembro de la comunidad activó la alerta; sin embargo, los hombres lograron huir.

“Nuestra resistencia es civil. Ya nos sacaron de los valles y ahora que estamos en las montañas no vamos a permitir que también nos expulsen”, dice, refiriéndose a que durante la Conquista sus ancestros se vieron forzados a abandonar de sus territorios.

Pero tal vez lo que más preocupa a este indígena que espera graduarse en ciencias religiosas son las llamadas. En mayo del 2017, recuerda, un miembro del Eln lo recriminó por teléfono por un presunto apoyo de las comunidades al Ejército y lo citó a un punto entre Inza y Páez para “ajustar cuentas”. “Les dije que no había ningún acuerdo y que esa era una información infundada”, narra el líder, quien asegura que seguirá en su resistencia “hasta que se apague la luz del sol”.

En presencia de varios miembros de la guardia que escuchaban su relato y preocupaciones, recuerda que desde hace dos años, por diferencias con la comunidad, se retiraron las tropas establecidas en el cerro El Limón, desde donde se puede tener control visual del valle en donde está la población de Belalcázar. “Ellos cavaron trincheras y túneles en una zona sagrada, y luego empezaron a exigir que debíamos pedir permiso para transitar”. El asunto finalmente se resolvió, cuenta, en una tensa reunión con el entonces comandante de la base militar.

La última advertencia llegó hace apenas un mes, por medio de una



sar más allá del pequeño casco urbano llamado igual que el resguardo y que se encuentra a 482 kilómetros de Bogotá, a costa de ser sentenciado a muerte como colaborador del Ejército, como les sucedió, según los pobladores, a varios turistas. Hoy, con unas Farc desarmadas, la situación no es muy diferente, el conflicto solo cambió de actores.

Si bien ya no se oyen las explosiones de taticos ni los disparos de fusil desde las montañas que rodean al pueblo -ocurrían al menos tres hostigamientos por semana-, de los cuales aún quedan las huellas en las paredes de algunas viviendas, siguen las extorsiones, las amenazas y los grafitis, aunque ya no de la desaparecida guerrilla de Manuel Marulanda, sino de los nuevos grupos que rondan esta zona del Cauca, un departamento en donde se han presentado 21 ase-



*Ermes Pete es tal vez el gobernador más joven que ha tenido el resguardo de Belalcázar, en Páez, Cauca. Hoy ya no ostenta ese cargo, pero sigue representando a su comunidad en otras labores.*

llamada al actual gobernador del resguardo, el profesor Álvaro Vargas, a quien le dijeron: "No se meta de sapo a proteger a ningún h. p.". Vargas interpreta que se referían a su antecesor, a quien le ha venido brindando seguridad.

"Uno sabe que sale de la casa, pero no cómo va a allegar; el peligro es latente", dice Julio Andrés Valencia, hijo de un indígena paez y una paisa que estuvo en Bogotá trabajando en una panadería y como obrero de construcción, pero volvió al pueblo para convertirse en la sombra de su líder.

Ermes Pete no puede ocultar su preocupación por las amenazas, pero dice confiar en que los espíritus de la madre naturaleza lo protegerán ante la "complicada" situación que está viviendo y sentencia: "Yo puedo morir hoy pero mañana estará otro defendiendo nuestro territorio".

# Colombia



En 2016, Guillermo Pérez apoyó a campesinos del alto de Tucuy, en Becerril, tras la captura de varios líderes acusados de tener nexos con el Eln. FOTO: LUDYS OVALLE JÁCOME. EL TIEMPO

## El deseo de compartir con su hija puede más que 20 años de amenazas

Guillermo Pérez es un líder campesino del Cesar que libra una lucha por el territorio y los recursos naturales.

LUDYS OVALLE JÁCOME - ESPECIAL PARA EL TIEMPO - VALLEDUPAR

“**R**ecuerdo que estaba hablando con mi familia, tenía a mi hija menor sentada en las piernas cuando le preguntaron: ‘¿Luna, donde está papi (...)?’ La niña miró hacia la pared y señaló mi fotografía. Para ella, su papá era solo una imagen en la pared”, recuerda compungido el líder de derechos humanos Guillermo Pérez Rangel mientras oculta su cara entre las manos, intentando detener el llanto, pero las lágrimas terminan descolgándose por sus mejillas.

Desde aquel episodio ha transcurrido casi una década, y fue determinante para que, en el 2010, tomara la decisión de regresar a Colombia luego de permanecer cinco años en Venezuela, a donde había huido asustado por las constantes amenazas de las llamadas Autodefensas Gaitanistas o ‘clan del Golfo’.

Guillermo Pérez Rangel es uno de los defensores de derechos humanos más escuchados en el Cesar, un departamento con vocación agrícola y célebre por su Festival de la Leyenda Vallenata, pero que en la década de los ochenta vivió una bonanza marimbera y desde los noventa hasta hoy, una minera, al tiempo que han ido creciendo la resistencia contra esa explotación y la defensa de los recursos naturales.

Nació en el corregimiento de Guamalito, en El Carmen (Norte de Santander), es alto, delgado, y



defensa de los derechos humanos y la protección de los recursos naturales. “No me considero líder de nada. Soy un campesino al que las circunstancias pusieron en este lugar y que, junto con otras personas, ha decidido tejer ideas y acciones para construir un mejor porvenir”, sostiene Guillermo, quien asegura que seguirá en su lucha hasta que “el sol se me apague”, aunque desea profundamente ejercer su trabajo sin amenazas, “sin el miedo a mis espaldas”.

“...”, cuenta Pérez, quien usa un sombrero de fieltro con corona pinchada con el cual cubre su abundante cabello ondulado.

A costa de su propia vida, extendió su consigna a otros ámbitos, como la defensa de los campesinos de la serranía del Perijá. En el 2014 alzó su voz en contra de la judicialización de estas comunidades, acusadas de ser integrantes de la guerrilla. Pero esto le generó nuevas represalias de las Autodefensas Gaitanistas. En esa ocasión le dejaron en la casa de un compañero un panfleto que decía: “Te va-

### SIN PISTAS DE LAS AMENAZAS

Desde el 2014, Guillermo Pérez viene denunciando ante las fiscalías 7 y 16 de Valledupar las amenazas que ha recibido, sin que hasta ahora haya resultados en las investigaciones. De hecho, este campesino recuerda que en el 2016, durante una reunión con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, la entonces directora seccional de la Fiscalía argumentó que “el delito de amenaza es muy difícil de investigar porque la víctima no aporta pistas ni dice quién la está amenazando”, asegura Pérez.

Su caso también lo ha llevado a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y el Ministerio del Interior.



sido difícil sobrellevar la trágica muerte de otros compañeros”.

El hostigamiento más reciente ocurrió el 17 de diciembre del año pasado, luego de acompañar a las comunidades arhuacas a la Minga Indígena Nacional. En esta oportunidad, las Autodefensas Gaitanistas lo declararon a él y a su familia objetivo militar.

Todas esas amenazas no solo han cumplido el objetivo de atemorizar a las comunidades, que ahora temen participar en procesos sociales, sino que, además, lo obligaron a distanciarse de su círculo más cercano. “Hemos tomado esto con mucha preocupación. Tememos por su vida. Sus hijas, desde hace mucho tiempo, no comparten con él momentos con libertad”, afirma apesadumbrada una familiar de Guillermo.

Aunque el liderazgo social que realiza este hombre de campo que terminó refugiado en la ciudad es a pasos lentos y pone en riesgo su vida, esta actividad también le deja satisfacciones. “Cuando veo que la gente logra la restitución y evito un desalojo, revivo el compromiso que tengo. Gracias a ello pienso que puedo ayudar a la sociedad en defensa de la vida digna”, declara complacido. Lo motivan también los reconocimientos recibidos, producto de su labor. Fue nombrado representante de la Asociación de Campesinos y Comunidades Sin Tierra del Cesar y secretario de la Mesa de Derechos Humanos y Territorios.

#### Faltan garantías

Frente a las recientes intimidaciones, este líder campesino, que como muchos otros en la región ha sido estigmatizado, ha recibido el respaldo de la ONG Somos Defensores y de la Fundación Manos Unidas de Colombia. Mario Jácome, quien trabaja con la Fundación, pide que las instituciones le brinden al líder mejores herramientas para su locomoción en estas zonas, porque “las agresiones le impiden desarrollar todo lo proyectado, y se pierde el fortalecimiento que le ha venido imprimiendo a esta población”.

Guillermo tiene un chaleco, un celular y un botón de pánico -que aún no sabe para qué sirve- que le dio la Unidad Nacional de Protección, y desde diciembre le dieron un escolta, pero sin vehículo y sin transporte. “¿Te imaginas, yo subiendo a la serranía del Perijá con un escolta (...) o caminando por la ciudad, y el escolta atrás, ¡eso es ridículo!”, dice entre risas, y afirma que él ha criticado las medidas policivas y considera que son más efectivas las medidas colectivas de protección, pero lamenta que “no haya voluntad del Gobierno” y cita como ejemplo que hace tres años vienen solicitando la instalación de la mesa de garantías en el Cesar, pero eso “no ha sido posible”.

“Nos hemos dado cuenta de que debemos tejer redes; hacer grupos de solidaridad nos ha servido como mecanismo de autoprotección. Cuando uno se entera de una agresión en cualquier parte del país a un compañero, nos pronunciamos de inmediato para proteger al compañero; nuestra consigna es: ‘Si tocan a uno, tocan a todos’, y esto nos ha funcionado hasta el momento”, asegura el líder, a quien por momentos parecería que se le forma un nudo en la garganta que no lo deja hablar.



sus manos largas y curtidas denotan las tareas rurales que ha venido ejerciendo durante muchos años. Aunque apenas tiene 41 años, su rostro triste y su mirada profunda lo hacen lucir cansado y con unos cuantos años de más.

Por contratiempos del destino no concluyó la secundaria, pero eso no ha sido impedimento para desarrollar sus objetivos y dominar una comunicación fluida sobre cualquier temática, principalmente la lucha territorial, la de-

## 20 años de amenazas

La primera amenaza la recibió de los grupos paramilitares en 1997, en el sur de Bolívar. En aquel entonces vivía en Buena Señá, pueblo minero donde el líder ayudó a organizar una marcha de rechazo al proyecto de explotación de oro de la multinacional AngloGold Ashanti. “Ante la falta de garantías abandoné esa región y me establecí en Valledupar, donde me vinculé al Comité de solidaridad con los presos polí-

mos a joder por hp. Pero los hostigamientos no pararon ahí. Empezaron a llegarle por medio de correos electrónicos.

Esas advertencias finalmente se concretaron en una amenaza directa. Era diciembre del 2015, y se dirigía a su casa en el barrio Nando Marín, cuando dos hombres en motocicleta y armados lo abordaron. “Me quitaron las pertenencias y me gritaron: ‘Sigue metiendo la nariz donde no te importa, y lo vas a lamentar’”, recuerda.

Y en un día de junio del 2016 solo le dieron tiempo hasta las 3 de la tarde para que se marchara de la región. “Decidí irme a Bogotá; allá estuve tres meses, pero, por falta de apoyo y garantías, me devolví”, subraya atribulado mientras escarba en la vorágine de sus recuerdos otro hecho que lo hace sucumbir en el desconsuelo. “Lo más duro ha sido superar el asesinato de mi hijo de 3 años, Arnoldo Pérez; aún no lo había registrado. También ha

Aunque los más de 20 años de amenazas le transformaron la vida y lo han vuelto desconfiado, el líder Guillermo Pérez dice que continúa en el Cesar por el amor de su hija -su recuerdo lo hizo regresar al país, por encima del riesgo que corría- y porque sueña con un mundo que se preocupa por la defensa de los recursos naturales y más justo y con oportunidades para miles de campesinos que han sufrido el despojo, el desplazamiento y la estigmatización.

# No obstante las alertas, van tres defensores asesinados

En el 2016, la Defensoría del Pueblo monitoreó 12 casos de amenazas contra defensores de los derechos humanos en el departamento del Cesar. Un año después, el infortunio cobró la muerte de tres líderes. El primer caso ocurrió en el municipio de El Paso, zona minera, donde el 7 de enero desconocidos mataron a Aldemar Parra García, presidente de la Asociación Apícola del Cesar (Asograce); luego se registró el asesinato de la wiwa defen-

sora de los derechos de la mujer de su etnia, Yoryanis Isabel Bernal Varela, de 43 años, al sur de Valledupar, y el 4 de febrero, en la vereda Entre Ríos, corregimiento de Caracolicito, jurisdicción de El Copey, acribillaron al presidente de la junta de acción comunal, Edilberto Cantillo Mesa, de 55 años.

Aunque se desconocen los móviles que rodearon las muertes de estos defensores, algunas versiones destacan que fueron a raíz de las represalias a

que estaban expuestos por el liderazgo que ejercían en esta sección del país.

No obstante el despliegue de algunas acciones realizadas por las autoridades, no se han logrado frenar los hostigamientos, y la situación para este colectivo sigue siendo vulnerable y no parece mejorar.

“La Defensoría del Pueblo emitió tres advertencias y alertas tempranas sobre los riesgos que se han configura-

do alrededor de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Una la hicimos en el 2016 a nivel del Cesar; otra, en marzo del 2017 a nivel nacional, y hace poco realizamos una tercera, también a nivel nacional, pero incorporando al Cesar. Siempre hemos realizado llamados a la Fiscalía, son ellos quienes deben avanzar en las investigaciones, pero hasta ahora no hay nada concreto”, anotó un funcionario de la Defensoría del Pueblo.

## Colombia

FOTO: HÉCTOR FABIO ZAMORA. EL TIEMPO

# 'La defensa y protección de líderes debe ser una política sostenible'



El Vicepresidente dice que hay 600 puntos rojos en el país y habla de la estrategia de investigación de los asesinatos y de la presencia del Estado en esos territorios.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ - EDITOR EL TIEMPO | @guirei24

**E**l Gobierno Nacional ha identificado 600 zonas donde los defensores de derechos humanos corren más riesgo. En esos territorios, veredas, puntualmente, se están enfocando las acciones para garantizar la protección de dichas personas.

El vicepresidente, el general Óscar Naranjo, es quien desde el Gobierno viene articulando la presencia del Estado en esas regiones y las estrategias para contrarrestar las amenazas contra los líderes. Naranjo reconoce que en el último año se ha "aprendido que la sensibilidad y la priorización por la defensa y protección de los líderes no puede ser un tema coyuntural, debe ser parte de una política sostenible, que privilegie esas investigaciones y también la protección de esas comunidades".

## ¿Cuáles son las motivaciones de los asesinatos de líderes?

Enfrentamos un fenómeno que tiene, por lo menos, cuatro tipos de victimarios. Tristemente, el Eln se convirtió en un victimario de líderes sociales y está asesinando a excombatientes de las Farc. El segundo, las bandas criminales, y ahí aparece el 'clan del Golfo'. Un tercer grupo son las personas que se resisten a que se aplique con eficacia la política de restitución de tierras; por eso, reclamantes de tierras han sido asesinados. Y hay unas confrontaciones territoriales donde, una vez las Farc dejaron ese territorio, se ha generado una especie de anarquía criminal.

## ¿La motivación del narcotráfico se ha agudizado con los carteles mexicanos?

El crimen organizado transnacional tiene interés en que Colombia siga siendo productor de drogas. Y esa relación entre esos carteles, especialmente mexicanos, con productores colombianos tenemos que romperla, porque está alimentando esta violencia.

## ¿El narcotráfico y la sustitución de cultivos ilícitos serán el mayor riesgo para los líderes en el futuro?

Lo viene siendo, pero ya hemos identificado esos riesgos y esa amenaza, y hoy, el programa sustitución está fuertemente vinculado a la protección y control territorial de la Fuerza Pública.

## ¿La corrupción es otra causa?

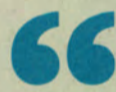
Sí. Hay evidencia de que líderes sociales que han elevado su voz para denunciar corrupción local han terminado asesinados. Yo diría que los cuatro pilares fundamentales con los que se está llegando al territorio son: ampliar la oferta de seguridad y justicia, buscar mecanismos de inclusión social y convivencia, producir desarrollo con obras de infraestructura en esos territorios que estuvieron muy abandonados y gobernabilidad transparente, es decir, lucha contra la corrupción.

## El desarme de las Farc generó vacíos de poder y eso aumentó el riesgo...

El número de líderes asesinados ha aumentado, pero hay que tener en cuenta que cuando las Farc firmaron el acuerdo que puso fin al conflicto estaban en 280 municipios; hoy tenemos identificados 41 municipios que son un problema, y no son la totalidad de esos municipios, son unas veredas. Hay que tener en cuenta que en 239 municipios el plan de consolidación territorial y de llegada del Estado ha sido efectivo, pues muestran reducción de violencia.

## ¿Cómo llegan a esos pequeños territorios?

Lo que hemos hecho es ampliar la cobertura del Plan Victoria, que fue el plan bandera en el momento de la firma del acuerdo para consolidar el territorio. ¿Cuál es la lección que nos deja el plan? Que es necesario microzonificar. Por esa



## Los líderes asesinados han

aumentado, pero hay que tener en cuenta que cuando las Farc firmaron el acuerdo estaban en 280 municipios; hoy tenemos identificados 41 que son un problema".

razón, el Presidente dio instrucción a la Policía para que el Plan Orus o el Plan Victoria Plus llegue a las 600 veredas identificadas como los puntos rojos. A cada una de esas veredas se ha destinado un grupo de militares y policías para que permanezca con tres finalidades: control territorial integral, protección de las comunidades y diálogo directo con los líderes sociales, para generar una reconstrucción del tejido social y acercar a esas comunidades al Estado.

## ¿Cambian las acciones de acuerdo con cada zona?

El gran aprendizaje es que hay que tener una política nacional, pero también estrategias locales para entender la problemática en función de los microterritorios.

## La excepción es Tumaco; allí, el riesgo para los líderes es casi generalizado...

Hay que considerar que Tumaco es dos veces la extensión del Quindío, es un territorio con 336 veredas, y allí está la mayor concentración de cultivos de coca, y eso crea una convergencia criminal que altera la vida de esas comunidades. Por eso hemos elegido, desde la Vice-

presidencia, como foco de actuación a Tumaco. Allí, lo que se encuentra son varios problemas: hay un tema de tierras, los consejos comunitarios que le dan uso colectivo a la tierra están en tensión con invasores y colonos. Y hay que resolver el tema de cultivos ilícitos por dos vías: erradicación forzosa y sustitución voluntaria. En el intermedio, llevar en los planes de desarrollo con enfoque territorial unos mínimos, con carácter urgente, de servicios de salud, educación, vivienda y vías terciarias.

## Ya se reconoce el trabajo de las entidades del Estado, pero aún falta por hacer...

Durante 53 años de conflicto, el Estado y su institucionalidad obraron con una lógica contrainsurgente, y ahora a este Estado le corresponde aprender a estar en esos territorios de manera articulada y permanecer. El presidente Santos me ha dado el mandato para que en el Gobierno seamos los grandes articuladores, de tal manera que la presencia institucional sea coordinada, integrada, sostenida y permanente; falta mucho por hacer, pero lo estamos haciendo.

También estamos cambiando la lógica de intervenir en función del asesinato de líderes. En el pasado había dos eslabones únicos: tratar de proteger a los líderes con medidas individuales y, en el caso de los asesinatos, perseguir a los victimarios para someterlos a la ley. Hoy estamos trabajando para fortalecer los mecanismos de prevención, y por eso el decreto que firmó el Presidente a finales del 2017 asegura un sistema de alertas tempranas que involucra a la sociedad, a las comunidades, al Gobierno, a la Defensoría del Pueblo y a las instituciones. Pero, además, estamos pasando a la creación de instrumentos institucionales de protección colectiva de las comunidades, en coordinación con las Fuerzas Militares, la Policía, la Fiscalía y las mismas comunidades.

## Histórico avance en aclaración de crímenes

Los asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales, que en algunos lugares del país registran un incremento hasta del 200 por ciento, le impusieron un desafío al Estado pero en particular a la Fiscalía General.

Este panorama llevó al organismo investigador a formular una estrategia para priorizar la investigación de esos crímenes, al tiempo que, con el acompañamiento de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), construyó una directiva con "las mejores prácticas internacionales y la debida diligencia" para revertir el modelo de investigación.

Dicha directiva plantea unos pasos que debe seguir el fiscal que conoce de un caso de homicidio de defensor, entre ellos la llegada inmediata al lugar de los hechos, la preservación de la escena del crimen, tener como primera hipótesis de investigación que el homicidio ocurrió por causa de la labor de defensa de los DD. HH. o del liderazgo, y solo cuando se descarte dicha hipótesis podrá analizar una diferente. Otro de los pasos en la investigación es la asociación de casos, con lo que podrá "conectar criterios comunes y patrones".

Con la nueva estrategia se llegó a alcanzar el índice más alto de esclarecimiento de estos crímenes en la historia de la Fiscalía: 50 por ciento, que contrasta con el índice de esclarecimiento del 25 por ciento en el homicidio en general". Al 6 de abril pasado, el índice había bajado a 46,62 por ciento como consecuencia de los nuevos asesinatos de líderes.

De hecho, de los 163 casos -con 164 víctimas-, hay 10 en fase de indagación, 24 en investigación, 31 en juicio y 11 con sentencia. Y de 185 personas vinculadas, 136 están privadas de la libertad.

El éxito de la estrategia de investigación ha sido reconocido por la Delegación de la Unión Europea para Colombia, por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las ONG Human Rights Watch y Somos Defensores.

# 46,62

## es el avance en esclarecimiento

DE ASESINATOS  
DE DEFENSORES  
DE DD. HH.

# 'Hay que hacer un esfuerzo georreferenciado': ex alto comisionado

TODD HOWLAND DICE QUE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN ZONAS DE RIESGO PARA LOS LÍDERES SOCIALES NO PUEDE SER SOLO A TRAVÉS DE LA FUERZA PÚBLICA.

Todd Howland es tal vez uno de los pocos que mejor conocen la situación de riesgo de los defensores de derechos humanos en Colombia. Como alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, cargo que ocupó entre 2012 y marzo pasado, este estadounidense conoció de cerca las amenazas,

los asesinatos y las circunstancias en las que estas personas desarrollan su labor.

De acuerdo con Howland, en el país hay 229 veredas y corregimientos donde existe riesgo para los líderes. Desde 2016, la ONU reporta 164 asesinatos de estos defensores de DD. HH.

Veían esas zonas tienen



Según Todd Howland, el 75 % de asesinatos de líderes ocurren en áreas que dejaron las Farc. CLAUDIA RUBIO

“

**No se puede analizar qué está pasando con los defensores sin entender el contexto donde está pasando esto.**

unas características en común, como ausencia del Estado, pobreza, presencia de las Farc (antes del desarme) y economías ilegales (cultivos ilícitos y minería ilegal), han aparecido otros factores que agravaron la situación: disputas de tierras, corrupción de funcionarios y carteles del narcotráfico mexicanos, bandas criminales, disidencias y Eln, que buscan copar el vacío dejado por las Farc.

Por tal motivo, el exdelegado considera que antes de cualquier intervención en esos territorios se debe “entender el contexto” de cada zona y “ver cómo se puede superar el problema”. “No se puede ver todo tan macro, hay que hacer un esfuerzo georreferenciado, y no se pueden tener metas tan enormes y hay que hacerlas poco a poco”.

El ex alto comisionado también señala que la pre-

sencia institucional no puede ser a través de “imponer orden y autoridad”, brindar protección individual a cada líder ni de reclamar resultados a la Fiscalía y a la Policía, sino con un conjunto de acciones que transformen las condiciones de vida de esas comunidades, cambien las economías ilegales y generen confianza en el Estado. En este aspecto, reconoce el liderazgo del general Óscar Naranjo al coordinar las acciones de las entidades de su sector.

En cuanto a las investigaciones por asesinatos de líderes, considera que estos no se deben ver como hechos aislados y recomienda empezar a analizar las relaciones entre crímenes, móviles y posibles actores intelectuales o intereses económicos poderosos que quieren seguir con el control. Esto, asegura, garantizará que no continúe el riesgo.